



En dos años, Bonilla dejará BC con 42% más deuda

Congreso autoriza a gobernador hasta 3 mil millones de pesos para hacer obra y pagar 870 millones que dejó “Kiko” Vega. Durante la actual administración se refinanció la deuda, se crearon e incrementaron impuestos y se “justificaron” cobros de servicios como el agua en razón de sanear las finanzas. Manejo de la deuda ha sido “desastroso”, advierte economista

A seis meses de que concluya la administración de Jaime Bonilla Valdez, legisladores de Morena, así como de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) y sin partido, aprobaron el Dictamen 175 de la Comisión de Hacienda, con el que se faculta al gobierno estatal contratar uno o varios créditos por hasta 3 mil millones de pesos a un plazo de 20 años.

El Dictamen 175 contempla que el o los créditos tendrán una tasa variable (TIIE + 0.90%), con lo que el Estado terminaría pagando 4 mil 975.35 millones de pesos al término del plazo. Para sufragar la nueva deuda, el gobierno de Bonilla Valdez afectará “irrevocablemente” hasta el 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federales (FAFEF) por las próximas dos décadas. Merma que padecerán los gobiernos subsecuentes.

Según lo expuesto por la autoridad, con la nueva deuda se pagarán 870 millones de pesos que al 19 de febrero de 2021 sumaban las cuentas por pagar dejadas por el gobierno anterior. El resto del recurso será para financiar obras de infraestructura, aunque no hay un listado de cuáles se ejecutarán.

Enrique Manuel Roviroso Miramontes, académico de la Universidad del Valle de México (UVM), alertó que con este aval del Congreso, la deuda directa (sin contar empréstitos de municipios) incrementará en 42% al término de la gestión de Bonilla Valdez.

“¿Dónde se ha visto que una administración aumente de esa manera desproporcionada la deuda pública en un periodo de dos años?”, inquirió el economista, además de considerar, “eso está fuera de toda lógica y debería ser motivo de protesta de todos, de un serio cuestionamiento que para nada menciona la Auditoría Superior del Estado” en la Opinión Técnica proporcionada al Congreso antes de que los legisladores avalaran el nuevo endeudamiento, el miércoles 21 de abril.

Para el especialista, el manejo de la deuda en la actual administración ha sido “desastroso”, ya que el gobierno refinanció la deuda de largo plazo y se crearon e incrementaron nuevos impuestos para supuestamente sanear las finanzas y proporcionar infraestructura a la ciudadanía. Incluso, dijo, se hicieron cobros indebidos por el servicio de agua que fueron justificados para hacer obra pública, los cuales son un problema latente, ya que a la postre el gobierno deberá que devolverlo.

En entrevista con **ZETA**, el catedrático explicó que los estados financieros que obran en el propio gobierno indican que al 31 de octubre de 2019 la deuda directa del gobierno estatal (sin considerar a municipios ni a paraestatales) ascendía a poco más de 10 mil 200 millones de pesos. Para el 30 de noviembre de 2020, la cifra se elevó a 11 mil 525 millones de pesos. Es decir, un incremento de mil 300 millones de pesos.

Con la reciente autorización del Congreso, la deuda atribuible a la administración de Jaime Bonilla Valdez sumará 4.3 mil millones de pesos en dos años, lo que significa un aumento del 42%.

“Van a decir que es producto de la pandemia de COVID-19, pero no hicieron nada extraordinario durante la crisis sanitaria que justifique tal incremento. Si hubieran apoyado a las empresas o a los municipios, si hubieran hecho algo extraordinario que ameritara este gasto extraordinario, pero no hubo nada. Al contrario, esta administración se ha caracterizado por la poca acción en fomento a la inversión y a la generación de empleo, manifestó.

“Ellos se *ponen la medalla* de que ha habido generación de empleo en el Estado, que estamos en primer lugar, pero el gobierno no genera empleos, son las empresas. Los gobiernos no generan nada más que problemas y cada vez tenemos más en términos de gasto corriente y de las necesidades que hay que atender”, agregó el académico de la UVM.

Por otro lado, resaltó la opacidad del gobierno de Bonilla Valdez, toda vez que desde hace cuatro meses no publica el reporte de deuda al que está obligado, pese a que la tecnología actual permite tener los estados financieros “prácticamente al día”.

DEUDA DE CORTO PLAZO “AHOGA” A GOBIERNO DE BC

En diciembre de 2019, el Congreso de Baja California aprobó al gobierno de Bonilla Valdez reestructurar la deuda de largo plazo por 12 mil 594 millones 900 mil 240 pesos, bajo el argumento de que se sanearían las finanzas al tener mayor flujo de recursos a corto plazo, pues se liberarían 970 millones de pesos durante el primer año de refinanciamiento.

El mismo mes, la mayoría de Morena le aprobó a Bonilla duplicar la sobretasa del Impuesto sobre Nómina (al 3%), aumentar el impuesto a hoteles y moteles, además de avalarle la creación de un impuesto a combustibles, así como a plataformas digitales, entre otros, para -justificaron- resarcir el quebranto financiero dejado por el ex mandatario Francisco Vega de Lamadrid.

Sin embargo, el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indica que después del refinanciamiento, el gobierno de Bonilla Valdez contrató 13 créditos de corto plazo por 3 mil 730 millones de pesos, del 6 de agosto de 2020 al 9 de marzo de 2021.

En opinión de Rovirosa Miramontes, esto es reflejo de que el gobierno actual no hizo la tarea de reducir o ajustar el gasto corriente para evitar caer en un endeudamiento permanente. Por el contrario, el gobierno de Bonilla impulsó la municipalización de San Quintín, aun sabiendo que no hay recursos para ello.

“San Quintín requerirá 120 millones de pesos al año solo para tener una estructura burocrática. De municipalizarse, necesitará 80 millones de pesos, entonces estás hablando que se destinarán 200 millones de pesos anuales para nóminas y gastos corrientes de esos nuevos municipios, más otros 300 millones para dotarlos de infraestructura”, planteó el entrevistado.

Recursos que saldrán de una “bolsa que implica quitarle a Mexicali, Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada para financiar esa estructura burocrática”. En suma, la administración de la 4T está “pateando el bote” en materia de deuda pública, como lo hicieron los gobiernos anteriores del PAN y PRI y sigue haciendo de la administración pública “un botín” en el que mete a gente sin experiencia y sin tener el perfil necesario para un cargo.

“No se han puesto a hacer un planteamiento serio, de largo plazo, para reducir el gasto corriente, y por ende, vemos que cada vez se necesita recurrir a más deuda pública para poder hacer frente a ese gasto excesivo que se tiene, que es básicamente nómina y gasto asociado a esta”, y por lo mismo no se observa inversión en infraestructura.

Según el reporte de la Secretaría de Hacienda federal, los montos más grandes de los créditos a corto plazo corresponden a los contratados por el gobierno estatal en noviembre y diciembre de 2020.

Eliseo Díaz, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), comentó que todos los créditos a corto plazo fueron adquiridos para “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal” y tienen diferentes tasas de interés.

Destaca el crédito suscrito el 26 de febrero de 2021 con *Banco Azteca* por 430 millones de pesos, con una tasa efectiva de 19.5%. La segunda mayor tasa efectiva (17.41%) corresponde al crédito contratado el 9 de marzo de 2021 con *Financiera Local, SA de CV* por 180 millones de pesos. En tercer lugar, se encuentra el crédito con *Accendo Banco, SA de CV* por 170 millones de pesos, con una tasa efectiva del 13.89%. Del total de empréstitos, la mayoría (nueve) tienen como fecha de vencimiento el 30 de julio del año en curso.

Ante esta situación, la agencia calificadora **HR Ratings** mantuvo la calificación crediticia de Baja California en BBB+, con perspectiva negativa, toda vez que Bonilla Valdez tendrá que liquidar la deuda de corto plazo por 3 mil 700 millones de pesos tres meses antes de que concluya su gestión, lo cual continuará presionando la liquidez del Estado.

Ricardo Gallegos, director ejecutivo de Finanzas Públicas y Deuda Soberana de HR Ratings, dijo a *Milenio* que el reto para la próxima administración radica en hacer eficiente el ingreso y el gasto para reducir “el descalce que existe en las finanzas del Estado, y que ya es muy evidente”. El descalce ocurre cuando las fechas de pago de créditos llegan antes que las fechas de ingresos de recursos.

Además, previó que entre 2022 y 2025 el gobierno de Baja California deberá cubrir el pago de pensiones de por lo menos 5 mil 617 jubilados, que representarán aportaciones extraordinarias de mil 317 millones de pesos al año.